****

**EVALUACIÓN**

**PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL 10 COMUNAS MÁS POBRES DE CHILE SEGÚN ENCUESTA CASEN 2006**

**Informe Final**

**Diciembre 2010**

**DIVISIÓN DE POLÍTICAS Y ESTUDIOS**

**DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN**

**UNIDAD DE EVALUACIÓN**

1. **INTRODUCCIÓN[[1]](#footnote-1)**

La solicitud de evaluar el “Plan de Acción Territorial para las 10 Comunas más Pobres de Chile según la Encuesta CASEN 2006” proviene de la jefatura de la División de Municipalidades, que busca contar con antecedentes para determinar si es o no pertinente repetir el Plan en esas u otras comunas de Chile, con las modificaciones que sean necesarias y en el entendido que el instrumento debe ayudar a superar la pobreza en los territorios en que se aplique.

De una primera revisión de los documentos nacionales que dan cuenta del Plan de Acción, se desprende que es imposible establecer una relación directa entre variaciones en los índices de pobreza e indigencia comunal y las medidas propuestas por el Plan.

En términos generales, éste quiso poner a disposición y/o focalizar una batería de instrumentos públicos para la formulación de proyectos de inversión, la ejecución de dicha inversión, el fortalecimiento institucional municipal (mejoramiento de capacidades técnico-profesionales y procesos de gestión), así como la entrega de diferentes tipos de subsidio a las personas.

Pero aunque la relación entre la construcción de una obra de infraestructura o equipamiento y el mejoramiento de ciertas condiciones de vida es obvia, no lo es la relación entre esa construcción y el mejoramiento de los ingresos familiares. Asimismo, se podrían establecer e incluso medir las consecuencias del fortalecimiento institucional municipal sobre la satisfacción de las personas en relación con los servicios y sobre la eficiencia y eficacia de los procedimientos internos del municipio, pero también en este caso está lejos de ser obvio el impacto de las medidas sobre los ingresos familiares.

Sólo en el caso de los subsidios se podría establecer una relación con los ingresos y el consecuente acceso de las familias a la canasta básica, pero esta relación sería la inmediata sobre el ingreso monetario total y no la mediata sobre un aumento permanente –y eventualmente progresivo– del ingreso autónomo (sin subsidios del Estado).

Esto es que, aunque quisiéramos entender la superación de los índices de pobreza como el impacto deseable del Plan, dicho impacto no se puede establecer de manera directa. En esa circunstancia y teniendo en cuenta también las pretensiones que efectivamente tuvo el Plan al momento de gestarse, el equipo evaluador formuló una evaluación de procesos y resultados de éste, y no una evaluación de impacto.

1. **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN**

El llamado Plan de Acción Territorial se desarrolló entre 2007 y 2009 y tuvo origen en una solicitud colectiva de los 10 alcaldes de las comunas cuyos índices de pobreza fueron los más elevados del país, según la Encuesta CASEN 2006. A raíz de este requerimiento, manifestado en reunión de esas autoridades locales con la entonces Presidenta Michelle Bachelet, ésta instruyó tomar acciones al Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

Las comunas objeto de la intervención y sus índices de pobreza a 2006 son las siguientes:

CUADRO Nº 1

**10 comunas con más altas tasas de pobreza según Encuesta CASEN 2006**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Comuna | Porcentaje población pobre |
| 1 | Colchane | 50,94% |
| 2 | El Carmen | 38,19% |
| 3 | Los Álamos | 37,87% |
| 4 | Lebu | 37,50% |
| 5 | Tirua | 36,15% |
| 6 | Alto Biobío | 35,83% |
| 7 | Galvarino | 35,72% |
| 8 | San Ignacio | 35,59% |
| 9 | Saavedra | 35,08% |
| 10 | Los Sauces | 34,89% |

Las intervenciones se definieron de acuerdo con información recogida entre los actores locales acerca de los principales problemas enfrentados por los respectivos territorios, los que, a nivel de simple hipótesis (según rezará el primer objetivo general del Plan, enunciado en 2007), serían causales de los índices de pobreza (se detallan más adelante).

El programa no contó con presupuesto específicamente asignado. Se planteó como una coordinación interinstitucional que permitiera hacer confluir instrumentos y recursos públicos de manera prioritaria, en las 10 comunas definidas. Finalmente resultó en las siguientes acciones, bastante limitadas en relación con la expectativa, y que tuvieron variables grados de éxito: financiamiento de contratación de profesionales para formulación de proyectos de inversión y postulación a fondos públicos, financiamiento de asistencia técnica para la elaboración de herramientas de gestión (planes estratégicos, diseño organizacional, levantamiento de procesos, descripción de cargos y reglamento interno), financiamiento de cursos de capacitación a funcionarios municipales, apoyo en la interlocución municipio-SERPLAC para la obtención de recomendaciones técnicas a los proyectos, apoyo en la articulación de los municipios con Gobiernos Regionales para lograr la priorización de los proyectos de inversión.

1. **METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN**

Si bien los proyectos y programas del sector público siempre pueden ser objeto de evaluaciones, es condición necesaria que éstos lleven registros y sistematizaciones sobre etapas y procesos llevados a cabo, así como sobre resultados parciales y finales. En este caso, esa información no es completa y, sobre todo, no es consistente.

De acuerdo con los datos entregados por los profesionales que tuvieron relación con el trabajo, no se trató propiamente de un programa, sino de una serie de acciones de inversión ejecutadas por distintas instituciones y por una única vez en las 10 comunas más pobres del país, esto es, un plan. Con todo, la presente evaluación se planteó los siguientes objetivos (éstos se operacionalizaron mediante la definición de ámbitos, variables e indicadores que irán apareciendo a lo largo del desarrollo de este documento):

1. Evaluar metodología de formulación de diagnóstico.
2. Evaluar metodología de diseño de intervención.
3. Identificar y caracterizar los procesos de gestión y los problemas que en ellos pudieran haberse encontrado (en el uso de las herramientas de gestión y financiamiento).
4. Identificar y caracterizar los roles ejercidos por las instituciones que participaron.
5. Determinar gasto global ejecutado (si es que se cuenta con información).
6. Identificar y caracterizar impactos y resultados surgidos en la comuna y el municipio respectivamente, por cada una de las acciones de intervención.
7. Generar propuestas de continuidad o reformulación de modelo de intervención, a modo de programa piloto.

A falta de mayores antecedentes documentales, para cubrir las variables y sus indicadores se recurrió a una metodología cualitativa, consistente en la aplicación de entrevistas semiestructuradas a los protagonistas del Plan de Acción:

Alcaldes:

* Los Álamos: Sr. Lautaro Melita,
* Lebu: Sr. Carlos González,
* Tirúa: Sr. José Aniñir,
* El Carmen: Sr. Juan Díaz,
* Galvarino: Sr. Miguel Hernández.

Ex Alcalde:

* San Ignacio: Sr. Nelson Aedo.

Secretarios de Planificación:

* Galvarino: Sr. Jaime Solís,
* Saavedra: Sr. Carlos Fleite,
* Los Sauces: Sr. Jorge Escobar.

Funcionario Gobierno Regional del Biobío:

* Sr. Hugo Candia.

Funcionaria a cargo del Plan en SUBDERE:

* Sra. Teresita Mery (División de Municipalidades).

Ex-Jefe División de Municipalidades:

* Sr. Samuel Garrido.

Ex-funcionario a cargo del Plan en MIDEPLAN:

* Sr. Jorge Caro (Gabinete del Subsecretario).

Otros funcionarios de la SUBDERE participaron más tangencialmente, ya no se desempeñan en la repartición o no estuvieron disponibles. En el caso de MIDEPLAN, no hay antecedentes sobre la participación de otras personas.

El equipo evaluador optó por no visitar la comuna de Colchane en consideración a la distancia y el alcance de esta evaluación. En consecuencia, el informe se refiere sólo a las comunas de las regiones del Biobío y la Araucanía.

Además de la realización de entrevistas, fue revisada documentación disponible, cuyo informe más completo es el de cierre del Plan, fechado en agosto de 2009 y adjunto al presente documento como Anexo Nº 1.

1. **EVALUACIÓN**
   1. **METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO**

En sus procesos generales, la participación en el Plan estuvo centrada en los alcaldes, además del equipo de profesionales de SUBDERE, más tarde en el Gabinete del Subsecretario de MIDEPLAN y, muy eventualmente, en la Intendenta de la Araucanía de la época. En el caso de la Provincia de Arauco en la Región del Biobío, no hubo participación relevante del Gobierno Regional o la Intendencia.

El diagnóstico, en particular, involucró participación ciudadana a través del Ministerio de Salud, que, en el caso de la Araucanía, puso a disposición sus recursos humanos y financieros para realizar el levantamiento de requerimientos de la comunidad, en la línea de las orientaciones del trabajo de esa cartera en los últimos años que, específicamente en el área de la atención primaria, ha incorporado la participación ciudadana en la comprensión y cuidado de la salud como un concepto integral. En el caso de Biobío, el alcalde de Lebu señala una importante participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también apoyo de universidades en diagnósticos específicos, particularmente en las comunas de Lebu, Tirúa y Los Álamos. En este caso también hubo discusión con la Asociación de Municipios de la Provincia de Arauco, Arauco 7, y participación de actores sociales.

Además, información y elementos generales de diagnóstico fueron recabados por los encargados ministeriales del Plan entre los alcaldes de las 10 comunas. Según se desprende de los documentos nacionales revisados (SUBDERE), aparece como diagnóstico consolidado un listado de 10 tópicos generales que se transcriben a continuación:

• Desempleo y precariedad laboral,

• Bajos niveles educacionales y competencias para una inserción laboral adecuada,

• Falta de proyectos de fomento productivo,

• Limitaciones de diversa índole en relación con la disponibilidad de agua para riego,

• Altos niveles de ruralidad, dificultades de conectividad y de saneamiento básico,

• Emigración hacia el sector urbano y precarización de la calidad de vida rural,

• Importante porcentaje de población rural de tercera edad,

• Ausencia de una adecuada coordinación de los servicios públicos,

• Limitada capacidad financiera de los municipios,

• Pertinencia cultural de programas e iniciativas hacia el mundo rural indígena.

Como ya se puede entender, los puntos anteriores no corresponden a la conclusión de un diagnóstico participativo, sino de algunos encuentros organizados por SUBDERE o convocados por las Intendencias, en que se reunieron los alcaldes de las comunas incorporadas a la iniciativa. De hecho, uno de los documentos de los que se dispone para esta evaluación, indica que “se realizaron encuentros y diálogos para realizar un levantamiento de carencias y oportunidades en 7 de las 10 comunas: Colchane, San Ignacio, Alto Biobío, El Carmen, Galvarino, Saavedra y Los Sauces, con la participación de las autoridades locales y, *en algunos casos, con representantes de las organizaciones sociales[[2]](#footnote-2)*. En las comunas de Tirúa, Los Álamos y Lebu, atendiendo a los avances logrados en la elaboración participativa del Plan Arauco se utilizó preferentemente la experiencia y antecedentes generados en dicho Plan”.

Con todo, los alcaldes entrevistados describen su participación como la simple asistencia a unas pocas reuniones, en las que no había una agenda clara ni una oferta distinguible –mucho menos específica y diferenciada– para las 10 comunas pobres. Con mucha frecuencia, los alcaldes y los profesionales municipales (Secretarios de Planificación) que más tarde asumieron los contactos con el Gobierno central y las Intendencias, estiman que las reuniones fueron simplemente pérdidas de tiempo: instalación de expectativas que posteriormente no serían cumplidas.

En ninguno de los documentos nacionales disponibles se profundiza en las metodologías de levantamiento de diagnósticos. Mucho menos se dispone de una sistematización de los resultados de aquellos, salvo en unas pequeñas fichas comunales que se mencionan más adelante.

El antes mencionado diagnóstico, levantado por el Ministerio de Salud en la Región de la Araucanía –a través de su correspondiente Secretaría Regional (SEREMI)– , sólo es mencionado y relevado en la entrevista realizada al Secretario de Planificación de la Municipalidad de Los Sauces: el Ministerio financió el levantamiento de demandas y requerimientos de la ciudadanía en todas las áreas y no sólo en la de salud, mediante metodologías participativas a las que esta evaluación no tuvo acceso. Cabe recalcar que este trabajo es muy valorado por ese entrevistado. Es también destacado por la profesional de la SUBDERE (central) entrevistada, la que le asigna más importancia y más cobertura territorial de las cuales, sin embargo, no hay evidencia.

Como se dijo, en el caso de las comunas de Tirúa, Los Álamos y Lebu de la Región del Biobío, para un diagnóstico más detallado se utilizó la información levantada con anterioridad por el Plan Arauco; es decir, no hubo un trabajo específico para efectos del Plan de Acción aquí evaluado.

A ambas fuentes, más los datos públicamente disponibles a nivel nacional (índices de pobreza e indigencia CASEN, datos censales, finanzas municipales), cada municipio agregó su propia información estadística y territorial.

* 1. **METODOLOGÍA DE DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN**
     1. **Diseño general:**

Para hablar del diseño de la intervención, hay que retroceder a la concepción del Plan, en el nivel de las conversaciones entre los alcaldes, la Presidenta y las autoridades de MIDEPLAN y SUBDERE.

En ese nivel, el encargo consistió en desarrollar una línea de trabajo orientado a superar déficits de las 10 comunas que tenían los más elevados índices de pobreza del país. Este enunciado resulta bastante vago y, según varios de los entrevistados (profesionales y alcaldes), condujo a la total ausencia de precisiones respecto a un objetivo general o metas a lograr; tampoco las hubo respecto a los instrumentos a utilizar, ni mucho menos a las facilidades de que se dispondría para adaptarlos: esto constituirá una necesidad y un obstáculo fundamental, según se verá más adelante.

Puede decirse, entonces, que el programa simplemente no contó con un diseño, aunque aparezcan aproximaciones en diferentes documentos. Lo delatan las entrevistas en las comunas y lo hacen ver explícitamente la encargada en la SUBDERE y quien se hizo cargo más tarde en MIDEPLAN.

Una vez traspasada la idea a un equipo profesional, aparentemente ésta no fue sometida a consideraciones metodológicas y se recurrió, más bien, a revisar las posibilidades de la oferta *de hecho* de instrumentos de acción públicos, dado que la instrucción presidencial no abrió posibilidades distintas, como instrumentos o recursos financieros específicos.

Si bien el entonces Jefe de la División de Municipalidades SUBDERE afirma que el Plan no tuvo más pretensiones que facilitar a los 10 municipios el acceso prioritario y expedito a la batería de instrumentos disponibles, esta afirmación no se ve corroborada por los documentos revisados, ni mucho menos por las expectativas sembradas en los alcaldes y sus equipos.

El primer documento de que se dispone, titulado “Informe y Programa de Acción Territorial” y fechado en agosto de 2007, señala el siguiente objetivo (no contiene objetivos específicos):

* Visualizar los principales factores que inciden en los resultados de la CASEN 2006 en los territorios de las comunas mencionadas y buscar alternativas de solución en el corto y mediano plazo.

Luego desarrolla una lista denominada “lineamientos para la acción”, que no es mucho más que la simple descripción genérica y no aplicada de una batería de instrumentos públicos disponibles para preinversión e inversión y cuyo potencial impacto en los “factores que inciden en los resultados de la CASEN” –léase índices de pobreza– es, por lo menos, discutible.

Éste es el único documento que avanza en diagnósticos comunales específicos –aunque breves e irregulares–; es decir, es lo único que se aproxima a lo que en el objetivo aparece como “visualizar factores”. Esos pequeños diagnósticos desembocan en listados de ideas de proyectos y montos de inversión asociados.

El siguiente documento de que se dispone está fechado en mayo de 2008 e indica los siguientes objetivos:

*Objetivo general:*

* Generar un conjunto de dispositivos de apoyo orientado a formular estrategias y acciones específicas que permita formular un plan de acción de corto plazo en las 10 comunas con mayor índice de pobreza, según CASEN 2006.

*Objetivos específicos:*

* Identificar las principales problemáticas que caracterizan a las 10 comunas, particularmente aquellas referidos a las dimensiones económicas, sociales y de conectividad que inciden en sus altos niveles de pobreza rural.
* Promover instancias pertinentes para lograr una estrategia de intervención coordinada de los actores relevantes a nivel nacional, regional y local (MIDEPLAN, SUBDERE, Intendencia, GORE, SERPLAC, URS, Gobernaciones), para la búsqueda de soluciones sociales y económicas adecuadas a la realidad de cada territorio.
* Apoyar a los 10 municipios con mayores índices de pobreza, a nivel de gestión intersectorial y financiera, cuando corresponda, para resolver los diversos nudos críticos que dificultan la aprobación de sus principales iniciativas de inversión.
* Realizar procesos de revisión y ampliación del conjunto de beneficios –prestaciones y subsidios sociales– que constituyen parte de la oferta pública del sistema de protección social en la población vulnerable de las 10 comunas.
* Fortalecer las competencias municipales tanto a nivel de generación de iniciativas pre-inversionales, como en aquellas referidas a la gestión social del desarrollo.

Como metodología de trabajo (el único “diseño”), aparece la siguiente (con variaciones menores) en todos los documentos disponibles (Cuadro Nº 2):

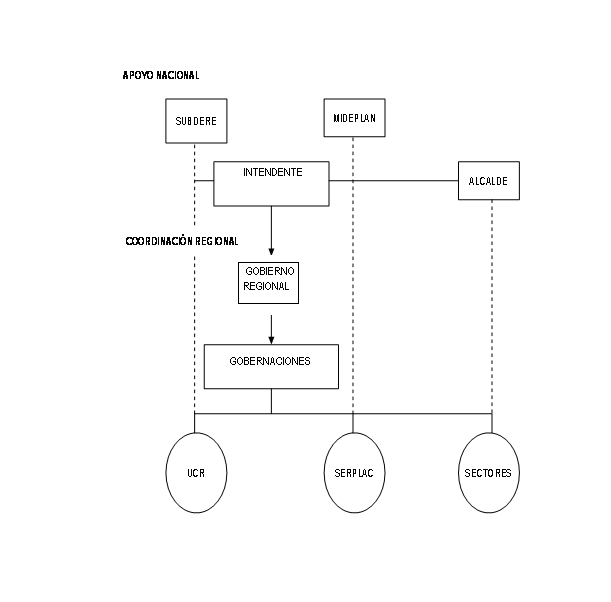
CUADRO Nº 2

**Esquema de coordinación Plan de Acción Territorial para las 10 Comunas más Pobres**

El desarrollo del plan de acción territorial se sustenta en un apoyo permanente de parte de SUBDERE hacía las 10 comunas, por cierto en complementariedad con otros actores públicos que tienen atribuciones, competencias y recursos financieros y humanos que deben poner a disposición de esta tarea prioritaria encargada por S.E. la Presidenta de La República.

La responsabilidad recae en SUBDERE, sin perjuicio de ello la coordinación territorial debe darse en el marco del siguiente esquema, el que pretende mantenerse durante 2009:

ESQUEMA DE COORDINACION



Además, y sólo para efectos de que el equipo profesional de la SUBDERE pueda dar cobertura a las 10 comunas, se definen 4 “territorios”, cada uno a cargo de un profesional:

1. Área territorial Araucanía: comunas de Galvarino, Saavedra y los Sauces.
2. Área Territorial Biobío 1: comunas de Lebu, Los Álamos y Tirúa.
3. Área Territorial Biobío 2: comunas de Alto Biobío, El Carmen y San Ignacio.
4. Área Territorial Tamarugal: comuna de Colchane.

Se menciona también una futura nominación de profesionales coordinadores de los Gobiernos Regionales, que deberían articularse con la SUBDERE. De acuerdo a las entrevistas, si los hubo éstos tuvieron muy poca importancia en las regiones a que hace referencia el presente informe.

Asimismo, los “otros actores públicos” que refiere el diseño del cuadro anterior no aparecen como apoyo o complemento en ningún momento. A lo más, son objeto de comunicación y solicitudes específicas de SUBDERE y MIDEPLAN.

Volviendo a los objetivos, hay que decir que no hay demasiada consistencia entre el objetivo general planteado en 2007 y el que finalmente se asumió (a partir de 2008). Además, si bien el primero (2007) sí se hace cargo del concepto de pobreza, el siguiente objetivo general (2008) y sus objetivos específicos se orientan a procesos y no a impactos –más que a *objetivos*, los enunciados corresponden a una serie de *acciones de un plan de trabajo*–, dejando de lado esa variable –nada menos que la que detona esta iniciativa– e incluso la posibilidad de enfrentar sus causales.

Por otra parte, ninguno de los documentos posteriores (2009) hace nueva referencia a alguno de los objetivos específicos enunciados en 2008. Y cuando se trata de “visualizar los principales factores que inciden en los resultados de la CASEN 2006” (documento de 2007), la metodología de recoger opiniones entre los alcaldes resulta, a lo menos, discutible.

Junto al resto del diagnóstico, el documento de mayo de 2008 da cuenta de algunas debilidades institucionales municipales –con confusiones metodológicas y temporales en que se mezclan observaciones de diagnóstico con acciones desarrolladas y por desarrollar para paliar los problemas en él detectados–. A renglón seguido, propone una “estrategia” de intervención, en la que precisa algunas *líneas de acción* por ejecutar durante 2008:

1. Identificación, formulación y financiamiento de los principales proyectos estratégicos para los 10 comunas,
2. Gestión y articulación de la oferta pública para el desarrollo productivo en territorios vulnerables,
3. Detección de brechas entre la demanda ciudadana de beneficios sociales y la oferta efectiva del sistema de protección social en las 10 comunas,
4. Ampliación de las prestaciones y subsidios sociales,
5. Fortalecimiento de la gestión social comunal.

Acciones más concretas y efectivamente ejecutadas se pueden identificar en documentos posteriores (junio, 2009) (se han reordenado):

1. Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión vía instrumentos SUBDERE, que se llevó a efecto por la vía de:
   1. Actualización de Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO)
   2. Formulación Planes Anuales de Desarrollo educativo Municipal (PADEM)
   3. Innovación en la Gestión de Servicios Sociales
   4. Asociativismo Municipal
   5. Preinversión (no hay detalle en este punto).
2. Sistematización de la Oferta Pública en las 10 Comunas, llevada adelante por SUBDERE y MIDEPLAN, y aparentemente entendiendo por oferta pública al conjunto de proyectos ingresados al Sistema Nacional de Inversiones.
3. Preinversión, esto es apoyo a los 10 municipios por la vía de disponer profesionales financiados por SUBDERE (Acciones Concurrentes PMB) y a cargo de ampliar y mejorar las carteras de proyectos municipales

El problema con los listados de lineamientos o líneas de acción, es que se establecen en distintos documentos y sin relación aparente entre uno y otro; tampoco está muy clara una relación entre los títulos y los proyectos posteriormente planteados o ejecutados. Un caso claro es la línea de acción Nº 3 del primer listado: en ninguno de los documentos o entrevistas aparece un diagnóstico de “brechas”.

Por lo demás, a la hora de consolidar las acciones efectivamente llevadas a cabo, otros documentos, incluido el de cierre (agosto 2009) indican:

1. Apoyo con profesionales para el levantamiento de carteras de proyectos de inversión
2. Asistencia técnica para el fortalecimiento de sus capacidades de gestión planificación, financiamientos de PLADECOS, PADEM, y herramientas de gestión
3. Programa de Apoyo a la Actualización de PLADECOS
4. Programa de Elaboración de PADEM
5. Diseño de Herramientas de Gestión
6. Capacitación a funcionarios municipales de los 10 municipios en diversas áreas de competencias
7. Apoyo y financiamiento para el fortalecimiento de sus direcciones comunitarias mediante programa de apoyo a la innovación social local
8. Entrega de recursos y asistencia técnica a través del programa de fortalecimiento al asociativismo
9. Apoyo a sus articulaciones con los GORES a fin de priorizar sus iniciativas de inversión.
   * 1. **Participación en el diseño:**

Según los documentos disponibles, y lo confirman plenamente las entrevistas, al momento de diseñar el listado de acciones se habría consultado a autoridades y técnicos locales, pero, al igual que en el caso del diagnóstico, a pesar de una declaración inicial de intenciones no aparecen en los hechos actores sociales o visitas a terreno. Esto es, no se puede decir que haya efectiva participación en el proceso de diseño del Plan.

* + 1. **Indicadores de resultado:**

Si bien, como se ha dicho, hubo un enunciado de objetivos específicos en un documento intermedio, éstos no mantuvieron continuidad en documentos posteriores, no fueron mencionados en alguna de las entrevistas ni tampoco se reflejaron en los resultados. Como en buena parte de los instrumentos de acción pública, el Plan se tradujo en carteras de proyectos por comuna, pero aún así no hubo un control ex-post del cumplimiento de objetivos. Luego, difícilmente se pueden encontrar, y no se encuentran, indicadores de resultado.

Por último, no habiendo un verdadero diseño ni suficiente sistematización de procesos y resultados, se hace difícil establecer el orden de los sucesos y más difícil aún encontrar la concatenación entre ellos, esto es, la relación de contenidos entre diagnóstico, objetivos y carteras de proyectos resultantes. Por lo tanto, y no existiendo indicadores asociados a objetivos (también ausentes), tampoco los proyectos resultan en parámetros de medición de cumplimientos.

* 1. **PROCESOS DE GESTIÓN**
     1. **Coordinación:**

Los funcionarios municipales y alcaldes entrevistados indican a la SUBDERE como principal responsable (para bien o para mal) de la gestión y resultados del Plan y asignan a MIDEPLAN y al Gobierno Regional una participación muy menor.

Esta imagen es matizada por los entrevistados de SUBDERE y MIDEPLAN, quienes sí declaran una coordinación y, a la vez, achacan a los municipios poca o nula flexibilidad para intentar avanzar en la resolución de problemas comunales sin un presupuesto especialmente asignado; les achacan también cierta ceguera (o simple desconocimiento) en relación con las gestiones hechas, por ejemplo, ante las SERPLAC para viabilizar proyectos que, antes de esas gestiones, no estaban en condición de obtener la recomendación técnica (RS) para optar a financiamiento.

En cuanto al Gobierno Regional, síntomas de su ausencia son el que el equipo evaluador sólo pudo obtener el nombre de un único funcionario vinculado con el Plan (en Araucanía, que fue entrevistado); también el que los entrevistados municipales no se refieren a Gobierno Regional sino a Intendencia, es decir a una intervención regional personalizada y no institucionalizada; por último, el nivel regional (salvo la SERPLAC) tampoco aparece mencionado por los entrevistados nacionales.

A lo anterior hay que, según las entrevistas municipales, la participación del GORE o la Intendencia se limita, en el caso de la Araucanía, a unas pocas convocatorias a reunión de alcaldes por parte de la Intendenta de entonces, cuya escasa presencia efectiva es, por lo demás, motivo de crítica entre los entrevistados. En el Gobierno Regional de Biobío, por su parte, no hubo un encargado formal de participar en el Plan. No obstante, el Sr. Hugo Candia, funcionario del Departamento de Inversión, operó como contacto entre los Alcaldes y entre éstos y la SUBDERE y otros ministerios. Pero su gestión, aclara al ser entrevistado, fue estrictamente personal y de su propia iniciativa. El GORE simplemente le facilitó los permisos y viáticos para salir a terreno.

En síntesis, hubo poca coordinación y, según manifiestan alcaldes y funcionarios municipales entrevistados, ésta se dio principalmente entre ellos y la SUBDERE, cuyo equipo de profesionales se encargó de mantener el Plan en vigencia, más allá de las dificultades políticas y administrativas con que éste se encontró.

Como instrumentos formales de coordinación, sólo se mencionan los convenios firmados entre los municipios y la SUBDERE para acceder a ciertos instrumentos de financiamiento con que ésta cuenta (se trata de convenios usualmente utilizados, más allá de la contingencia del Plan). El resto de la coordinación fue resultado de gestiones personales y relaciones informales del equipo de la Subsecretaría –y más tarde (sólo a partir de mediados de 2008) del profesional que asumió la responsabilidad en el Gabinete del Subsecretario de MIDEPLAN– ante otros actores institucionales (MOP, SERPLAC, GORE). En las comunas de la Provincia de Arauco se menciona algún tipo un convenio, pero éste fue suscrito en el marco del Plan Arauco y no del Plan de Acción aquí evaluado.

Liderazgo (apoyo) político visible, sólo se puede ver al comienzo, cuando se emite la instrucción y ésta baja desde las autoridades nacionales a los funcionarios, y después, a partir de la mitad de 2008 cuando en MIDEPLAN reparan en que no se está cumpliendo la meta presidencial de mejorar las condiciones de pobreza de las 10 comunas peor rankeadas y se reactiva la instrucción a través del profesional del Gabinete del Subsecretario. Fuera de eso, no hay otros momentos ni señales de apoyo político claro a un buen desarrollo del Plan de Acción. En el caso de las comunas de la Provincia de Arauco, sí se reconoce apoyo, pero éste se da en el marco del Plan Arauco (que opera por un canal distinto).

Cabe mencionar cierto liderazgo asumido por la Asociación de Municipios Arauco 7, la que hizo algunas propuestas que, sin embargo, no tuvieron eco en el Plan de Acción. Las principales líneas de esas propuestas eran mantener los subsidios al capital inmovilizado y activo fijo, sensible a todos los rubros, y la disminución por 10 años de todas las tasas impositivas de primera y segunda categoría para quienes lo solicitaran.

* + 1. **Recursos humanos:**

Para su gestión, el Plan contó con 4 profesionales destinados formalmente por la SUBDERE, con sus respectivos territorios de responsabilidad asignados. Según las entrevistas, sin embargo, estas responsabilidades no se manifiestan en la práctica y la gestión efectiva se concentra en 2 de esos profesionales.

A pesar de sus esfuerzos –reconocidos por los entrevistados municipales–, debido a su nivel jerárquico (staff profesional) el equipo de SUBDERE no tuvo la posibilidad de hacer gestión de alto nivel ni capacidad de tomar decisiones sobre recursos financieros o sobre diseño y modificaciones de instrumentos sectoriales. Esto es acusado en las entrevistas, tanto centrales como municipales, como una debilidad fundamental del diseño del Plan.

En el caso de MIDEPLAN, no hay antecedentes de destinación formal de personas. Sólo a mediados de 2008, esto es aproximadamente un año después de emitida la instrucción presidencial, aparece el único profesional del Gabinete del Subsecretario, que se encarga de hacer las gestiones que se mencionaron en la sección anterior y que fueron facilitadas por su nivel jerárquico.

En el caso de los Gobiernos Regionales, sólo aparece el profesional entrevistado en Biobío, cuyo rol y motivación se describió en el punto 4.3.1 anterior.

Fuera de los ya mencionados, el Plan aportó profesionales –vía Acciones Concurrentes del Programa Mejoramiento de Barrios– a los municipios objetivo, para que mejoraran y ampliaran las carteras de proyectos ingresados o por ingresar al Sistema Nacional de Inversiones (SNI), agilizando la obtención de las necesarias recomendaciones técnicas. Las entrevistas indican que estos equipos cumplieron su función y, de hecho, en la opinión de los funcionarios municipales y alcaldes, fueron el más importante –si no el único real– aporte del Plan.

* + 1. **Recursos financieros y materiales:**

El Plan no contó con recursos financieros “frescos”, esto es, especialmente destinados. Se planteó en todo momento –aunque, como se ha dicho, sin un diseño explícito y efectivo– como un plan de gestión de fuentes existentes. Los únicos recursos frescos destinados fueron los pagos de traslados y viáticos de los profesionales de SUBDERE. Aún así, entre los 10 municipios la expectativa fue la de contar con dineros especialmente destinados, expectativa que, evidentemente, no fue satisfecha.

Si bien la entrevistada SUBDERE indica que hubo reorientación o focalización especial de recursos financieros a las 10 comunas del Plan, esta información no es corroborada por los funcionarios municipales entrevistados, quienes indican que los fondos recibidos por los municipios no fueron diferentes de los que éstos reciben año a año de los diferentes programas públicos de financiamiento. La única destinación distinta que aparece, es la que financió la contratación de profesionales para trabajar en las carteras municipales de proyectos (apartado 4.3.2.). En este punto es importante recordar que, por lo general, a los funcionarios municipales y alcaldes les resulta difícil concebir planes o programas de acción efectivos en sus comunas, si éstos no involucran recursos frescos.

En cuanto a recursos materiales, sólo hubo los de la operación corriente de las instituciones participantes y las beneficiadas.

* 1. **ROLES INSTITUCIONALES**

Como ya se puede concluir de los puntos anteriores, la institución que asumió de manera permanente la responsabilidad por llevar adelante y a buen término el Plan de Acción fue la SUBDERE. Si bien MIDEPLAN estuvo formalmente incorporado desde el principio, no se puede afirmar que haya asumido una responsabilidad propiamente institucional.

En la práctica, quienes se desplazaron a terreno, convocaron las reuniones e hicieron esfuerzos efectivos por focalizar la aplicación de instrumentos, fueron los profesionales SUBDERE. De hecho, los instrumentos que más aparecen en los informes de gestión corresponden a los que administra la SUBDERE.

En el caso de MIDEPLAN, da la impresión que la participación fue más bien personal y no institucional. Esta participación se tradujo en contactos con otros Gabinetes, y se habría limitado a apurar la tramitación de los proyectos sectoriales (MOP, MINSAL). También se tradujo en contactos directos con los sectorialistas de las SERPLAC de Biobío y Araucanía, así como en facilitar la interlocución entre éstos y los encargados de proyectos de los municipios, de manera de destrabar la aprobación de los proyectos municipales ingresados al SNI.

Según el conjunto de entrevistas, el rol de los Gobiernos Regionales fue simplemente formal y escaso, con la sola excepción, por lo demás personal, del Sr. Candia en Biobío.

* 1. **GASTO**

El informe final de resultados del Plan sólo indica montos de gasto o inversión asociados a cierto tipo de actividades, por lo que no se puede estimar un gasto global. Se adjunta informe en Anexo Nº 1.

* 1. **IMPACTOS Y RESULTADOS**
     1. **Impactos territoriales:**

Aunque hay variación en los índices de pobreza de las comunas incluidas en el Plan de Acción, no es posible establecer la relación entre esa variación y las acciones ejecutadas, menos aún teniendo en cuenta que todas esas acciones tuvieron relación con gestión municipal y no con gestión social o comunitaria. Cabe tener presente, además, que la metodología para establecer los umbrales de pobreza en la encuesta CASEN 2009 variaron en relación con las mediciones de años anteriores, por lo que los resultados no son directamente comparables. Aún así, hay variaciones favorables y desfavorables de las tasas, según comuna, en circunstancia que todas ellas fueron objeto del Plan.[[3]](#footnote-3)

Sin perjuicio de lo anterior, hay que recalcar que los objetivos iniciales, implícitos en aquello que desencadena la iniciativa (índices de pobreza) y explícitos en el documento de 2007 (ver 4.2.1), se diluyeron rápidamente durante el proceso, por lo que podría plantearse que impactar en los índices de pobreza deja tempranamente de ser una consecuencia esperada de las acciones.

* + 1. **Resultados institucionales:**

Ni el informe final “de resultado” ni alguno de los informes intermedios propone ni realiza una evaluación de impacto sobre la gestión institucional de los municipios objetos del Plan de Acción. Sólo indican el listado de acciones ejecutadas en ellos.

Excepción a lo anterior es la tarea efectuada en relación con mejoramiento, ampliación y facilitación de la tramitación de las carteras de proyectos de inversión de cada municipio. En este punto, el informe muestra los listados de proyectos gestionados y el nivel de avance alcanzado en la tramitación de cada uno, así como los recursos obtenidos si los hubo. Sin embargo, si recurrimos a las entrevistas municipales, si bien los funcionarios y alcaldes reconocen la utilidad de haber contado con profesionales extra para la formulación de proyectos, no distinguen avances especiales en sus carteras que se hubieran logrado a través de la gestión entre ministerios o de MIDEPLAN central hacia las SERPLAC. En contrario y como se ha dicho antes, este punto es destacado como muy importante –y un logro personal– por parte del funcionario de MIDEPLAN entrevistado.

Las entrevistas son también contradictorias respecto al aporte de cada uno de los programas o instrumentos de apoyo –casi todos de SUBDERE–: en los municipios, la impresión es que el aporte no fue superior al normal de todos los años; en los entrevistados de SUBDERE y MIDEPLAN, la opinión es que sí se logró focalizar iniciativas y fondos hacia los 10 municipios. Algunas cifras se muestran en los gráficos siguientes (las tablas con los datos se encuentran en Anexo Nº 2):

GRÁFICO Nº 1



Fuente: Elaboración propia en base a datos PMB-SUBDERE

En cuanto al número de proyectos de la línea de Acciones Concurrentes (AACC) del Programa Mejoramiento de Barrios[[4]](#footnote-4) (Gráfico Nº1), variaciones claras y consistentes se pueden ver en algunas de las comunas a partir de 2008 y 2009. Las más notorias son Lebu, Galvarino, El Carmen y en menor medida Los Sauces. En el conjunto de las diez, si bien se percibe una tendencia al aumento, ésta no necesariamente coincide con el período de aplicación del Plan de Acción.

GRÁFICO Nº 2



Fuente: Elaboración propia en base a datos PMB-SUBDERE

A la hora de observar los cambios en los montos absolutos de dinero asignados a Acciones Concurrentes (Gráfico Nº 2), destacan por un aumento más o menos consistente, las comunas de Lebu, Los Álamos, Galvarino y Alto Biobío. Tanto Lebu como Los Álamos son parte del Plan Arauco, por lo que establecer si los aumentos son producto de éste o del Plan de Acción aquí evaluado.

GRÁFICO Nº 3



Fuente: Elaboración propia en base a datos PMU-SUBDERE

GRÁFICO Nº 4



Fuente: Elaboración propia en base a datos PMU-SUBDERE

En cuanto al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), tanto en el número de proyectos (Gráfico Nº 3) como en los montos aprobados (Gráfico Nº 4), la tendencia general del conjunto de comunas es a la baja, con eventuales aumentos en ciertos años y ciertas comunas, pero sin continuidad en años posteriores.

En consecuencia, no hay elementos que indiquen un fortalecimiento institucional municipal que sea resultado del Plan en particular.

Mucho menos podría afirmarse que se haya producido algún cambio institucional permanente. Por el contrario, podría decirse que las confianzas interinstitucionales, particularmente de los municipios para con las instituciones regionales (GORE y SERPLAC) y centrales (Ministerios), se ven debilitadas tras lo que los municipios ven como el incumplimiento de expectativas sembradas por una promesa de Plan de Acción. A la vez, la articulación entre SUBDERE y MIDEPLAN fue más bien débil en términos institucionales, aunque sí hubo articulación entre personas (profesionales encargados).

Es muy importante indicar que en las entrevistas municipales se acusa, en más de una ocasión, que los instrumentos públicos más importantes –sectoriales: MOP, Economía, etc.; de inversión o de fomento– y sobre los cuales los actores municipales pusieron sus expectativas, por una parte no actuaron (es un hecho que la acción se centró en el apoyo de SUBDERE a la gestión municipal) y, por otra, cuando hubo algún intento de utilizarlos, no tuvieron un mínimo de flexibilidad para ajustarse a una realidad comunal particularmente precaria y que no encaja en las lógicas y criterios tradicionales de evaluación y focalización de recursos públicos (tanto de la evaluación técnica de SERPLAC como de las políticas sectoriales: en las entrevistas se menciona como claro ejemplo al MOP).

Cabe agregar que en algunos casos hubo cambio de autoridades en el período de aplicación del Plan, por lo que se perdió la continuidad en los proyectos o acciones que se pretendía llevar adelante.

1. **SÍNTESIS Y ALGUNAS CONCLUSIONES**

A modo de síntesis de la evaluación de las diferentes variables, se puede afirmar:

* Aunque hubo algunas aproximaciones a nivel de bosquejo, el Plan no contó con un verdadero diseño ni, por lo tanto, con metodologías de levantamiento de diagnósticos, de aplicación de instrumentos –mucho menos de diseño o modificación de instrumentos–; tampoco hubo claridad en los objetivos (menos en potenciales indicadores) y, en consecuencia, no fue posible medir resultados o impactos. A esto contribuye la falta de una verdadera sistematización de los procesos y resultados.
* En esas condiciones, ya precarias, tampoco hubo un compromiso efectivo de las autoridades del momento: no fueron suficientes los compromisos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y de la Ministra de Planificación; el compromiso de otros ministerios fue prácticamente nulo a nivel nacional. Sólo destaca el apoyo de Salud, a través de su Secretaría Regional Ministerial en Araucanía.
* Sí hubo compromiso de los equipos profesionales de SUBDERE y MIDEPLAN pero, sin el apoyo político de las autoridades superiores, aquél no fue suficiente para cumplir con la expectativa sembrada en los municipios (por el solo anuncio de la iniciativa). En efecto, la falta de apoyo político significó ausencia de voluntad por aportar recursos específicos a los 10 municipios cubiertos por el Plan, así como por modificar instrumentos existentes o crear nuevos instrumentos, adaptando las herramientas de trabajo del Estado y el Gobierno a realidades que, con los parámetros y criterios actuales de evaluación, no son sujeto de acción pública.
* El impacto del Plan en las tasas comunales de pobreza no es visible y tampoco esperable, dada la batería de instrumentos con que se trabajó, todos ellos orientados a gestión municipal, esto es, esencialmente institucionales. Y aunque indirectamente ellos hubieran generado un impacto en las condiciones de pobreza de la población, resulta completamente imposible establecer la relación causas-consecuencias.
* En cuanto al impacto al interior de los municipios, sólo se cuenta con una lista de acciones ejecutadas y unos pocos resultados (consecuencias de esas acciones), pero no hay evidencias de cambios institucionales relevantes ni menos permanentes. En este caso es importante el hecho que los involucrados fueron los alcaldes y muy pocos funcionarios (básicamente los Secretarios de Planificación Comunal; no participaron mayores equipos técnicos ni, mucho menos, la ciudadanía), por lo que ante los cambios de autoridad producidos en algunos casos por las elecciones municipales, el Plan perdió continuidad.
* En el caso de las comunas de la Provincia de Arauco, la acción del Plan de Acción aquí evaluado se confunde con la del Plan Arauco, por cierto más institucionalizado, de más largo aliento y con más recursos.

Como conclusiones generales, se pueden plantear las siguientes:

* La concepción final y efectiva del Plan de Acción no fue la más acertada frente al objetivo implícito contenido en el motivo de la iniciativa y explícito en el primer objetivo general formulado (2007) así como en las expectativas manifestadas por las autoridades y funcionarios municipales: enfrentar la pobreza de las 10 comunas del país que en 2006 presentaban las tasas más altas.
* En términos generales, los alcaldes y secretarios de planificación comunal se vieron rápidamente frustrados frente al avance del Plan y a sus resultados. Algo similar sucede con los funcionarios de Gobierno encargados, salvo respecto a algunos logros puntuales (como el aceleramiento de la generación y obtención de recomendación y/o financiamiento de proyectos municipales y sectoriales de inversión).

1. **PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES**

Es evidente que superar la pobreza en un territorio es una tarea altamente compleja que no se resolverá aplicando unos pocos instrumentos de financiamiento público, menos aún si ellos están orientados al fortalecimiento institucional y no tienen –ni pretenden tener– un impacto directo, medible y medianamente rápido en ese territorio y su población. Y aunque los instrumentos estuvieran así enfocados, está demostrado que la superación de la pobreza no pasa por el simple mejoramiento de los ingresos para que éstos alcancen los umbrales establecidos por MIDEPLAN, CEPAL u otro organismo. La pobreza está condicionada sobre todo por otros factores, que dicen relación con las estructuras de oportunidades que ofrece el medio, determinadas por un conjunto de variables que van mucho más allá del mejoramiento del ingreso monetario de las familias o de la entrega de subsidios para paliar el déficit en ese ámbito: las estructuras de oportunidades implican desde las condiciones de integración/segregación socioespacial hasta los niveles de formación escolar/académica de los padres y los abuelos, pasando por un amplio conjunto de otros factores.

En vista de lo anterior, hay dos líneas de trabajo posibles, con distintos objetivos y de muy diferente alcance:

1. Atacar la pobreza, lo cual requiere de planes integrales y, por lo tanto, multisectoriales, que posiblemente incorporen colaboración público-privada.
2. Mejorar sustancialmente, de manera temporal o permanente, las condiciones de desempeño de las administraciones locales más precarias o que atienden situaciones territoriales más críticas; esto es, derechamente, hacer discriminación positiva de manera que esos municipios dispongan de recursos e instrumentos diferenciados, superiores y/o prioritarios que les permitan enfrentar esas situaciones.

En relación con la primera posibilidad –y lo confirma el asesor de Gabinete del Subsecretario de Planificación, desde su experiencia de trabajo en el Plan– difícilmente SUBDERE podrá hacerse cargo y la decisión política tendrá que provenir de alguna instancia de muy alto nivel y de alcance claramente transversal, como la Secretaría General de la Presidencia o el Ministerio de Hacienda.

El Plan de Acción evaluado en este informe es la demostración de que, desde una repartición de jerarquía mediana (como SUBDERE) y desde equipos profesionales sin capacidad de decisión sobre instrumentos o recursos públicos, sencillamente no es posible llevar adelante acciones transversales que requieren la obtención de compromisos de nivel ministerial y algunos cambios radicales en las lógicas de funcionamiento institucional tradicional del aparato estatal (éstos pueden llegar a implicar cambios legales). Aún así, nunca quedaré excluida la posibilidad de que SUBDERE, a través de su Subsecretario, haga gestiones a nivel de ministros y otros subsecretarios para que esa decisión política sea tomada, y asesore los procesos posteriores.

La responsabilidad técnica, por su parte, debería estar radicada en MIDEPLAN o en el futuro Ministerio de Desarrollo Social, entendiendo que éste se hace y se hará cargo de lo directamente relacionado con la superación de la pobreza.

Si el Plan opera de esta manera, además de asesorar en su área de especialidad SUBDERE sólo podrá aportar con sus instrumentos, todos los cuales son de apoyo a los municipios y Gobiernos Regionales, con la sola excepción del Programa de Mejoramiento Urbano, de alcance bastante limitado, y de algunos subsidios menores que están bajo la administración de esta repartición

En cualquier caso, no podrá tratarse de una iniciativa que espera resultados en el corto plazo ni, probablemente, tampoco en el mediano plazo.

En cuanto a la posibilidad de centrarse en fortalecer las capacidades de la administración local, una de las lecciones que deja el Plan de Acción 2007-2009 es que, por una parte, los instrumentos existentes en la SUBDERE no son suficientes por sí solos para mejorar de manera permanente las condiciones municipales para enfrentar la pobreza de sus comunas; por la otra, los instrumentos sectoriales de inversión –y sus parámetros de evaluación de iniciativas y proyectos– son demasiado rígidos para atender situaciones tan precarias como las de las economías de subsistencia, los déficit de saneamiento en zonas rurales y dispersas, o la falta del más simple de los accesos a ciertos puntos de las comunas –ni siquiera estamos hablando de caminos–. En relación con esto último, podría decirse que la estandarización de los instrumentos de inversión pública permite que éstos actúen *por sobre* ciertos umbrales de la realidad –que hacen social o económicamente rentables las inversiones–, pero deja fuera a una grande y muy específica parte de dicha realidad: justamente la de la población más pobre del país. Esto bloquea muchas posibilidades del trabajo de las municipalidades de las comunas correspondientes.

**¿Qué hacer?**

Lo pertinente parece ser la instalación de un Plan de Acción de gran alcance, que podría aplicarse a estas 10 comunas o a una cantidad superior –número que responderá a una decisión de la autoridad política– y que requiere de una fuerte inyección de recursos, superior a los estándares normales, en primer lugar en los municipios para fortalecer sus capacidades de manera permanente y para que inviertan en el territorio, y en segundo lugar directamente en el territorio por parte del Gobierno central y del nivel regional (GORE, FNDR y sectores).

Para lo anterior, se necesita un diseño metodológico que, por una parte, defina un curso de acción y, por otra, permita la evaluación permanente de resultados e impactos (esto es, que cuente con objetivos e indicadores de cumplimiento). Se requiere también sistematización permanente de procesos y resultados.

Las posibilidades de la SUBDERE, con los instrumentos de acción de que dispone actualmente (fortalecimiento de capacidades institucionales, inversión, fomento), son claramente insuficientes para cumplir objetivos de la magnitud de los que involucrará un Plan para superar la pobreza. En consecuencia, se requiere una intervención multidimensional y, por lo tanto, intersectorial.

Hay que tener en cuenta, además, que los problemas de los municipios son estructurales y se encuentran en el modelo chileno de administración local: financiamiento y capacidad de decisión sobre el uso de los recursos, plantas y dotaciones técnico-profesionales, idoneidad y calidad técnica de los profesionales, estructura organizacional, etc..

Tomando en cuenta que la pobreza suele estar asociada a aislamiento, los aprendizajes que se pueden extraer de la aplicación del Plan de Acción sobre las 10 Comunas más Pobres y de esta evaluación, son extrapolables a la aplicación del Decreto Nº 608, del 15 de julio de 2010, del Ministerio del Interior, SUBDERE, que establece la Política de Desarrollo de las Localidades Aisladas. El apoyo al desarrollo en esas localidades (y comunas) no puede limitarse a la coordinación o focalización de instrumentos existentes, mucho menos a los de una sola institución (la SUBDERE), mucho menos orientados sólo al fortalecimiento institucional. La focalización del apoyo al desarrollo territorial en zonas aisladas y rezagadas debe incluir instrumentos especiales, recursos especiales y exclusivos, pero sobretodo más recursos y esperar, efectivamente, impacto territorial.

**ANEXO Nº 1: Informe de resultado**

**ANEXO Nº 2: TABLAS DE DATOS DE INVERSIÓN PMB Y PMU**

Fuente: SUBDERE, Unidades PMB y PMU

TABLA Nº 1:

Número de proyectos del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB), línea Acciones Concurrentes (AACC) con recursos aprobados, por comuna y por año

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Alto Biobío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Colchane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| El Carmen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Galvarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 |
| Lebu | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 |
| Los Álamos | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Los Sauces | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Saavedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| San Ignacio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tirúa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |

TABLA Nº 2:

Montos de recursos aprobados del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB), línea Acciones Concurrentes (AACC), por comuna y por año

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Alto Biobío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.200.000 |
| Colchane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Carmen | 0 | 0 | 3.380.000 | 9.135.000 | 6.400.000 | 0 |
| Galvarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebu | 28.396.000 | 28.900.000 | 0 | 77.365.000 | 0 | 11.679.000 |
| Los Álamos | 25.000.000 | 32.200.000 | 0 | 0 | 108.000.000 | 0 |
| Los Sauces | 0 | 26.100.000 | 1.350.000 | 47.878.000 | 0 | 21.620.000 |
| Saavedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Ignacio | 0 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000.000 |
| Tirúa | 0 | 72.822.000 | 0 | 0 | 0 | 141.616.000 |

TABLA Nº 2 (CONTINUACIÓN):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Alto Biobío | 0 | 0 | 11.000.000 | 178.699.000 | 130.689.000 |
| Colchane | 0 | 8.413.000 | 0 | 0 | 0 |
| El Carmen | 0 | 15.300.000 | 0 | 12.500.000 | 0 |
| Galvarino | 0 | 18.531.000 | 0 | 358.171.000 | 478.548.000 |
| Lebu | 59.587.000 | 30.652.000 | 200.550.000 | 79.433.000 | 830.703.000 |
| Los Álamos | 29.794.000 | 41.675.000 | 125.458.000 | 166.729.000 | 11.288.000 |
| Los Sauces | 0 | 0 | 38.000.000 | 54.289.000 | 13.200.000 |
| Saavedra | 0 | 0 | 12.000.000 | 67.830.000 | 45.000.000 |
| San Ignacio | 0 | 22.253.000 | 107.600.000 | 0 | 0 |
| Tirúa | 46.594.000 | 232.828.000 | 37.822.000 | 16.800.000 | 112.600.000 |

TABLA Nº 3:

Número de proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) con recursos aprobados,

por comuna y por año

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Alto Biobío | 11 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Colchane | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| El Carmen | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| Galvarino | 12 | 23 | 17 | 11 | 4 | 10 |
| Lebu | 29 | 36 | 35 | 37 | 27 | 33 |
| Los Álamos | 22 | 27 | 25 | 41 | 25 | 32 |
| Los Sauces | 12 | 25 | 14 | 16 | 6 | 10 |
| Saavedra | 9 | 24 | 17 | 13 | 2 | 3 |
| San Ignacio | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 |
| Tirúa | 4 | 7 | 6 | 11 | 7 | 6 |

TABLA Nº 4:

Montos de recursos aprobados del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU),

por comuna y por año

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Alto Biobío | 169.268 | 169.366 | 42.116 | 149.887 | - | 49.512 |
| Colchane | 25.188 | 136.325 | 250.000 | - | - | 49.285 |
| El Carmen | 67.447 | 65.860 | 69.749 | 119.221 | - | 241.228 |
| Galvarino | 127.047 | 278.567 | 217.667 | 354.299 | 49.241 | 151.309 |
| Lebu | 370.374 | 644.176 | 453.035 | 615.885 | 1.089.792 | 589.017 |
| Los Álamos | 844.390 | 1.304.327 | 930.791 | 1.337.705 | 292.777 | 1.278.029 |
| Los Sauces | 145.089 | 313.618 | 171.732 | 326.160 | 91.193 | 218.216 |
| Saavedra | 123.619 | 464.899 | 232.340 | 308.523 | 51.964 | 112.390 |
| San Ignacio | 50.000 | 107.324 | 48.651 | 7.025 | 240.650 | 85.221 |
| Tirúa | 399.275 | 418.755 | 202.923 | 361.606 | 114.095 | 149.500 |

1. El presente trabajo fue desarrollado por Luciano Ortiz, Raquel Hernández y Patricia Acevedo, profesionales del Departamento de Estudios y Evaluación SUBDERE. [↑](#footnote-ref-1)
2. El destacado es nuestro. [↑](#footnote-ref-2)
3. Varias de las comunas del Plan sufrieron fuertemente los efectos del terremoto del 27 de febrero de 2010, por lo que los datos de pobreza pudieron volver a cambiar, cosa que sólo se podrá apreciar con ala próxima Encuesta CASEN. [↑](#footnote-ref-3)
4. La línea de financiamiento de Acciones Concurrentes corresponde a un porcentaje del presupuesto total del Programa Mejoramiento de Barrios, que se utiliza para la contratación de estudios (diseños de ingeniería y arquitectura, levantamiento de diagnósticos, estudios de títulos, entre otros), saneamiento de títulos de dominio, obras menores, etc., esto es, todos aquellos requerimientos que no corresponden a obras de saneamiento propiamente tales. [↑](#footnote-ref-4)